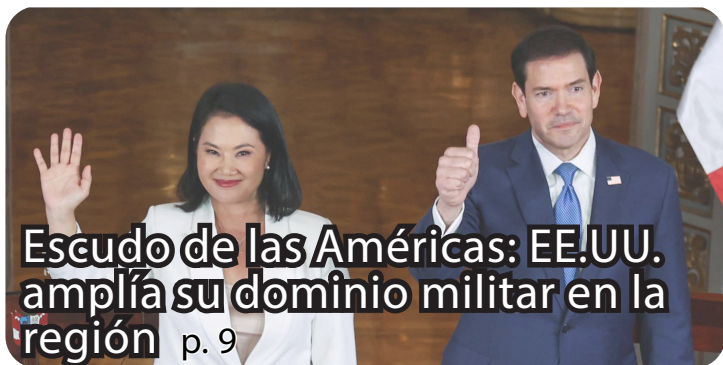




Escudo de las Américas: EE.UU.
amplía su dominio militar en la
región p. 9



BAJO LAS ÓRDENES DE WASHINGTON

José Gregorio Vielma
Mora debe ser
investigado | p. 5

PCV exige auditoría de
la deuda externa
| p. 4

Prestaciones sociales
bajo amenaza
| p. 7

Nueva agresión
del ICE contra
un inmigrante
venezolano | p. 8

¿Una OTAN islámica?:
El acuerdo de defensa
de La Meca
| p. 10

NAZA: el documental
que expone la guerra
de Israel en Gaza
| p. 11

Editorial

Delcy Rodríguez ante la ONU: el discurso de la capitulación

El discurso de Delcy Rodríguez ante la 81.^a Asamblea General de Naciones Unidas es una pieza que merece ser examinada con detenimiento, no solamente por lo que dijo, sino por todo lo que omitió. Rodríguez evitó referirse directamente a la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero, que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y presentó aquellos acontecimientos como «una dolorosa prueba» para Venezuela.

Según la encargada de facto de la Presidencia, los bombardeos fueron fruto del «estrangulamiento de la vida política interna». ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se refiere al viraje autoritario de la cúpula del PSUV, a la conspiración contra la soberanía popular del 28 de julio de 2024 o a la escalada represiva de los últimos dos años?

Y cuando habla de la «confrontación agudizada» con Estados Unidos, ¿de qué está hablando? ¿De aquellos espectáculos televisivos en los que los mismos dirigentes que hoy le sonríen a los agresores se rasgaban las vestiduras asegurando que, si los gringos entraban en Venezuela, nuestro país sería un nuevo Vietnam?

Pues los gringos entraron y ahora Rodríguez les da las gracias por su magnanimidad. Para colmo, presentó su subordinación a Washington como una «transformación política».

La escena resulta todavía más vergonzosa si se recuerda que, un día antes, en esa misma Asamblea General, Trump se jactó de haber dirigido la operación militar contra Caracas. Incluso afirmó, al referirse a las riquezas venezolanas, que después de una guerra «al vencedor le corresponden los despojos». Frente a semejante declaración, la delegación venezolana guardó silencio. No hubo una respuesta a esa humillación, ni una denuncia contundente de la intervención militar, ni una defensa pública de la soberanía venezolana. Definitivamente, los dolientes del país no habitan en Miraflores.

En un discurso plagado de eufemismos, Delcy Rodríguez llamó «cooperación económica» al proceso de entrega de los recursos nacionales al capital transnacional. Los venezolanos todavía no conocen el primer contrato de ese desfile de acuerdos que se han venido firmando durante los últimos meses. En esto, Rodríguez es una digna heredera de Nicolás Maduro, quien institucionalizó la opacidad como mecanismo para administrar los recursos del país al margen del pueblo y garantizar las condiciones necesarias para entronizarse en el poder.

La encargada también anunció ante Naciones Unidas un «proceso de transformación democrática», pero en Venezuela todavía cientos

de trabajadores permanecen sometidos a procesos judiciales por el delito de exigir derechos. Esto tampoco debería sorprendernos. Rodríguez pertenece a la misma cúpula política que durante años contribuyó a desmontar el Estado de derecho y a convertir la Constitución en una pieza de utilería.

Su discurso sigue el mismo guion de Marco Rubio y es bastante sencillo: no habrá una verdadera apertura política mientras no estén institucionalizadas las condiciones para el saqueo de los recursos venezolanos. Primero los negocios y cuando todo esté suficientemente amarrado, entonces veremos qué pasa con la democracia.

Para sellar esta farsa, Delcy Rodríguez recurrió a Bolívar para recordar que la soberanía reside en el pueblo. Claro que sí. Precisamente por eso resulta obsceno invocar a Bolívar mientras se remata al país al mejor postor.

El pueblo venezolano tiene derecho a recuperar sus instituciones, a decidir sobre sus recursos, a organizarse y luchar por sus derechos y a exigir responsabilidades a quienes han convertido a Venezuela en objeto de negociación entre cúpulas. Las justas aspiraciones de los venezolanos no pueden seguir siendo sacrificadas para garantizar la permanencia de una élite corrupta y cobarde.

Triunvirato entrega de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas

TRIBUNA POPULAR.— El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció la entrega de una quinta parte de las reservas petroleras del país a empresas estadounidenses mediante acuerdos que «fueron negociados de espaldas al pueblo venezolano» y sin los controles constitucionales correspondientes.

En un comunicado, el Buró Político del Comité Central del PCV rechazó «la nueva y grave entrega del patrimonio nacional» y sostuvo que la operación compromete una porción significativa de las reservas petroleras venezolanas.

«Delcy Rodríguez confirmó la entrega de 17 campos petroleros estratégicos con unos 65 mil millones de barriles de potencial probado», señaló el partido, que advirtió que no todos los campos incluidos en el acuerdo son yacimientos vírgenes, sino que algunos corresponden a áreas donde «el petróleo ya está comprobado y existe conocimiento operacional acumulado durante décadas».

Para el PCV, «no se trata de un acuerdo menor ni de una simple operación comercial», sino de «la entrega de una porción significativa de la principal riqueza nacional en condiciones que el país desconoce».

La organización cuestionó además que los acuerdos hayan sido negociados sin debate público y sin el control parlamentario que establecen los artículos 150 y 187 de la Constitución.

«Una vez más, los asuntos fundamentales de la vida política y económica venezolana se anuncian desde la Casa Blanca y Miraflores simple-

mente asiente», afirmó el comunicado.

«No estamos ante intereses coincidentes entre dos países que negocian en condiciones de igualdad y respeto mutuo», sostuvo la organización. «Estamos ante una política estadounidense orientada a garantizar sus propios intereses energéticos, económicos y estratégicos mediante el control creciente sobre los recursos venezolanos».

El PCV también cuestionó las declaraciones de Trump sobre el acuerdo y afirmó que el mandatario estadounidense «ha calificado el acuerdo como ‘un regalo’» y ha planteado utilizar el petróleo venezolano para atender las necesidades energéticas de Estados Unidos, incluida la recuperación de sus reservas estratégicas.

La organización comunista vinculó además la operación petrolera con los intereses geopolíticos de Washington y sostuvo que el crudo venezolano «se estaría convirtiendo en un recurso estratégico al servicio de las pretensiones supremacistas del imperialismo estadounidense a nivel global».

El PCV rechazó asimismo la afirmación de Rodríguez de que la soberanía nacional ha sido preservada y cuestionó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por las autoridades.

«La reforma impulsada por el triunvirato abre las puertas para que las empresas transnacionales no solamente tengan control operativo sobre proyectos petroleros estratégicos, sino que participan directamente en la toma de decisiones fun-

damentales sobre la explotación de los recursos de la nación», afirmó.

El partido también denunció un «desmantelamiento fiscal sin precedentes» y sostuvo que la nueva legislación «elimina y flexibiliza una serie de obligaciones tributarias y reduce los compromisos económicos de las empresas privadas que participarán en el negocio petrolero».

«Mientras al pueblo venezolano se le imponen salarios miserables, servicios públicos deteriorados y crecientes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, al capital transnacional se le ofrecen condiciones extraordinariamente favorables para apropiarse de una porción cada vez mayor de la riqueza petrolera», señaló.

El PCV acusó al Gobierno de haber abandonado su anterior discurso de defensa de la soberanía frente a Estados Unidos y afirmó que el triunvirato «ha terminado subordinando la política económica nacional a las necesidades de su propia supervivencia política».

«Hoy actúan como los guachimanes de la Casa Blanca», afirmó.

La organización también cuestionó la legitimidad de las autoridades para comprometer el patrimonio nacional y citó el artículo 138 de la Constitución venezolana: «toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».

El PCV afirmó que la crisis económica no puede utilizarse como argumento para transferir recursos estratégicos a corporaciones extranjeras y reclamó «transparencia, soberanía, control democrático y participación popular». ■

Delcy Rodríguez guardó silencio ante la nueva humillación a la dignidad de los venezolanos

Trump reivindica ante la ONU la agresión militar contra Venezuela y el saqueo de sus riquezas

TRIBUNA POPULAR.— La tribuna de las Naciones Unidas fue utilizada por Donald Trump para reivindicar, ante la comunidad internacional, la agresión militar contra Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre una parte sustancial de las reservas petroleras venezolanas.

El discurso del presidente de Estados Unidos ante la 81ª Asamblea General de la ONU adquirió una dimensión particularmente humillante para la soberanía y la dignidad del pueblo venezolano porque fue pronunciado mientras, en la misma sala, se encontraba la delegación venezolana encabezada por Delcy Rodríguez, quien no sólo permaneció en el recinto sino que posteriormente se reunió con el republicano en un hotel de Nueva York.

Trump no ocultó el carácter de la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero. Por el contrario, la presentó como uno de los grandes triunfos de su Gobierno.

«En enero, bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar de gran envergadura que penetró profundamente en la capital venezolana», afirmó.

El mandatario estadounidense describió el ataque contra una base militar venezolana como una demostración de la superioridad de las fuerzas estadounidenses y reivindicó la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó de «forajido», «dictador» y «verdadero criminal».

La intervención militar contra Venezuela no fue presentada como un episodio excepcional ni como una circunstancia que Washington pretendiera superar. Trump la exhibió como un precedente de la política que Estados Unidos está dispuesto a aplicar contra los pueblos de América Latina y el Caribe.

«Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental», declaró.

Y añadió una advertencia que trasciende las fronteras venezolanas: «Si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar incomparable para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos».

EL PETRÓLEO COMO BOTÍN DE GUERRA

Una de las partes más esclarecedoras del discurso fue la relación establecida por Trump entre la agresión militar y el acceso privilegiado de Estados Unidos a las riquezas petroleras venezolanas.

El presidente estadounidense recordó que recientemente Washington ha firmado «el mayor acuerdo petrolero de la historia» con Delcy Rodríguez; un pacto que involucra 65.000 millones de barriles de petróleo, es decir, una quinta parte de las reservas probadas de crudo del país.

«Las mayores compañías petroleras del mundo están entrando y las cifras son absolutamente increíbles», sostuvo.

Trump aseguró además que, al sumar las reservas de Estados Unidos y Venezuela, ambos países concentran más del 60 % del petróleo mundial.

Pero fue la frase posterior la que expuso de manera descarnada la lógica imperialista que atraviesa el acuerdo: «Fue una guerra, pero quizás sea el mayor acuerdo jamás alcanzado: al



vencedor le corresponden los despojos».

UNA AMENAZA PARA TODA AMÉRICA LATINA

El mensaje de Trump tampoco terminó en Venezuela. El mandatario estadounidense afirmó que durante décadas distintas administraciones permitieron que la región estuviera dominada por «pandillas despiadadas y carteles de narcotráfico», afectada por la migración e «infiltrada por adversarios extranjeros hostiles».

Su respuesta fue anunciar el reforzamiento del poder estadounidense, incluido el militar.

«Estamos reafirmando el poder estadounidense, incluido el poderío militar estadounidense, cuando sea necesario, en nuestra región y en todo el mundo», afirmó.

EL SILENCIO DE LA DELEGACIÓN VENEZOLANA

La dimensión política de las declaraciones de Trump se agrava por la actitud asumida por la representación oficial venezolana.

Mientras el presidente estadounidense reivindicaba públicamente la incursión militar en Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro —que, por cierto, se encuentra recluso a pocos kilómetros de la sede de la ONU— Delcy Rodríguez y la delegación venezolana permanecieron en silencio frente a esas afirmaciones.

Al final del día, Rodríguez acudió a un hotel de Nueva York a retratarse con el responsable de la intervención militar del 3-E, el artífice de las

ejecuciones extrajudiciales de compatriotas en el Caribe y promotor de las criminales «sanciones» contra el pueblo venezolano.

«Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común», escribió en sus redes sociales la encargada de la Presidencia de Venezuela.

Sin referirse al secuestro de su predecesor, Rodríguez se refirió a una «nueva etapa» de las relaciones entre ambos países y con esto descartó la posibilidad de aprovechar el principal foro multilateral del planeta para denunciar la intervención militar de principios de año.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio dijo que el encuentro fue «breve pero importante». Se habló del jugoso negocio de la deuda, cuyo proceso de reestructuración es uno de los secretos mejor guardados por la cúpula gubernamental.

También se habló de las elecciones, pero tal y como ha ocurrido durante los últimos ocho meses, su mención es tan solo una promesa. En el guion de tutelaje de Trump y Marco Rubio, la «transición a la democracia» tiene fases y la primera es «estabilizar al país», es decir, garantizar condiciones para institucionalizar el saqueo de los recursos a manos del capital transnacional. ■

PCV exige auditoría pública y ciudadana de la deuda externa venezolana

COMUNICADO.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) advierte que la anunciada reestructuración de la deuda externa venezolana amenaza con convertirse en un nuevo mecanismo de sometimiento del país a los intereses del capital financiero internacional.

Tras años de crisis económica, destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora y saqueo de los recursos nacionales, Venezuela enfrenta una nueva ofensiva del capital trasnacional para garantizar el cobro de obligaciones cuyo monto, origen y legitimidad no han sido establecidos de manera transparente ante el pueblo venezolano.

No existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país. Las estimaciones oscilan entre 95.000 millones y cerca de 240.000 millones de dólares. Esta enorme disparidad revela la opacidad con la que se ha manejado el tema y dificulta establecer con precisión cuáles son las verdaderas obligaciones de la República.

La combinación de bonos y laudos arbitrales constituye una verdadera camisa de fuerza que amenaza con comprometer durante décadas recursos fundamentales de la nación.

El PCV rechaza que la reestructuración de la deuda sea presentada como un simple problema técnico o financiero. Existe una disputa concreta por los recursos de Venezuela. Los fondos de inversión buscan garantizar el cobro de sus bonos; las corporaciones transnacionales aspiran a convertir sus reclamaciones en nuevos negocios; y los acreedores procuran asegurar su acceso a la renta nacional.

Pero además, la administración ilegal e ilegítima de Delcy Rodríguez no está facultada para llevar a cabo ningún proceso de reestructuración



de la deuda, ni ninguna otra negociación que comprometa el patrimonio de la República.

El pueblo venezolano no puede volver a ser sacrificado para garantizar las ganancias de quienes hicieron negocios con la deuda y la crisis del país. Antes que satisfacer las exigencias de los acreedores, los recursos nacionales deben destinarse prioritariamente a atender la emergencia social, recuperar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas para la clase trabajadora.

Frente a esta situación, el Partido Comunista de Venezuela plantea la necesidad de suspender el pago de aquellas obligaciones cuya legitimidad no haya sido establecida y abrir inmediatamente una auditoría pública, independiente y ciudadana de la deuda externa.

La deuda no puede ser utilizada como un mecanismo para imponer nuevas políticas de ajuste, privatizaciones y sacrificios sobre la clase tra-

bajadora. El principio debe ser claro: los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano están por encima de los intereses de los acreedores.

No aceptamos que las generaciones presentes y futuras sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas, sometidas a intereses especulativos o utilizadas para enriquecer a sectores privados nacionales e internacionales.

Venezuela necesita transparencia, soberanía y control popular sobre sus recursos. El pueblo venezolano no debe pagar las deudas de quienes lo saquearon.

¡Por una auditoría pública y ciudadana de la deuda externa!

¡Por la defensa de la soberanía nacional y los derechos del pueblo venezolano!

**Buró Político del Comité Central
del PCV**

Programa agrícola de EE.UU. golpeará a los pequeños y medianos productores venezolanos

TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) advirtió que la inclusión de Venezuela en el programa de garantías de crédito del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos profundizará la dependencia agroalimentaria del país y afectará a los pequeños y medianos productores.

Alí Jiménez, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, afirmó que la iniciativa estadounidense no está orientada a fortalecer la producción nacional, sino a facilitar la compra de materias primas agrícolas provenientes de Estados Unidos por parte del sector agroindustrial venezolano.

«Queremos expresar nuestra alerta hacia el pueblo venezolano, especialmente hacia los pequeños, medianos productores, pequeños, medianos campesinos, sobre esta herramienta del gobierno de Estados Unidos que busca convertir a Venezuela en un mercado de sus productos agrícolas», señaló Jiménez durante la declaración de prensa del Buró Político.

El dirigente comunista sostuvo que el programa de garantías de crédito no beneficia directamente a los campesinos, sino que favorece al sector agroindustrial para financiar la adquisición de productos agrícolas estadounidenses.

«Se trata, pues, de un programa que busca otorgar créditos no a los campesinos, no a los productores, sino al sector agroindustrial del

país para que compre materias primas agrícolas en los Estados Unidos», afirmó.

Para el PCV, esta política profundizará los problemas que ya enfrenta la producción agrícola venezolana, particularmente en rubros como el arroz y el maíz.

«Esto en detrimento de la producción nacional», insistió Jiménez, quien consideró que la medida no contribuirá a garantizar la soberanía alimentaria de Venezuela.

«Esta medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos no busca incrementar la soberanía y la independencia agroalimentaria del país», afirmó.

CONTRA LA DEPENDENCIA AGROALIMENTARIA

Jiménez alertó que la iniciativa puede incrementar las importaciones de alimentos y limitar las posibilidades de desarrollar cultivos y producción pecuaria en el país.

«Queremos alertar frente a esta acción que quiere poner al país en una situación en la cual haya un nivel de dependencia aún mayor con el imperialismo norteamericano», manifestó.

El dirigente comunista afirmó que la influencia estadounidense sobre la economía venezolana no se limitaría a los sectores petrolero y minero, sino que alcanzaría también el abastecimiento de alimentos.

«Ya vemos que no solamente ha sido el con-

trol de los campos petroleros y de la minería en nuestro país, sino que ahora el gobierno de Estados Unidos busca también controlar las importaciones, sobre todo de alimentos, que tiene nuestro país», sostuvo.

Ante este escenario, el PCV llamó al campesinado y a los productores a discutir la medida y movilizarse en defensa de la producción nacional.

«No podemos permitir que se priorice productos agrícolas de otros países que pueden ser perfectamente producidos en nuestro país», expresó Jiménez.

El dirigente planteó que la política agrícola debe orientarse a producir en Venezuela los alimentos que consume la población, como vía para alcanzar la soberanía agroalimentaria y frenar el deterioro de las condiciones de vida del campesinado.

«Debe ser esa la política agraria, agrícola y de producción en nuestro país: que estos rubros, que la producción de estos rubros sea aquí en Venezuela», afirmó.

Jiménez también denunció las precarias condiciones económicas de los productores del campo y cuestionó los precios que reciben por sus cosechas.

A su juicio, la situación contribuye al empobrecimiento de nuestro campesinado, que, afirmó, lleva «muchísimo tiempo» sometido a condiciones «paupérrimas». ■

Diputado José Gregorio Vielma Mora debe ser investigado tras declaración de culpabilidad de Alex Saab

TRIBUNA POPULAR.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al Ministerio Público investigar las declaraciones del exministro de Industrias, Alex Saab, quien reconoció su participación en delitos de lavado de dinero y ha señalado como cómplices a varios funcionarios, entre ellos, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) José Gregorio Vielma Mora.

El empresario colombiano se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida. En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Nicolás Maduro era presidente, organizó con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» con «sobornos» y «pagos ilegales» del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

Durante una rueda de prensa, el dirigente del PCV, Yul Jabour, cuestionó que, hasta el momento, no se haya informado de una investigación oficial sobre las declaraciones de Saab.

«Nos preocupa enormemente que hasta el día de hoy no haya un pronunciamiento oficial del gobierno venezolano sobre esa declaración», afirmó Jabour, quien recordó que Vielma Mora era para aquel entonces gobernador del estado Táchira y actualmente es diputado por el partido gubernamental.

Jabour sostuvo que el Ministerio Público está obligado a actuar ante hechos que podrían constituir delitos de acción pública. En ese sen-



tido, citó el artículo 285 de la Constitución y disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal para exigir que se determine la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades.

«La Asamblea Nacional debe pedir que se investigue y, si existen elementos, se debe levantar la inmunidad parlamentaria del diputado que ha sido señalado como implicado», expresó.

El dirigente también recordó las denuncias formuladas por el PCV y otras organizaciones populares sobre irregularidades en la distribución de alimentos mediante las cajas CLAP, entre ellas productos vencidos y sobrepagos.

Cuestionó que, en aquel momento, el Gobierno defendiera a Saab y lo presentara como un «héroe nacional», mientras ahora se conocen declaraciones que deben ser esclarecidas por las instituciones venezolanas.

El dirigente comunista reclamó transparencia y explicaciones públicas sobre el caso, al considerar que las denuncias afectan directamente los intereses de la nación.

«Hoy el país exige explicaciones, exige mayor transparencia», afirmó, al insistir en que corresponde al Ministerio Público verificar la veracidad de las declaraciones y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse. ■

Gobierno venezolano admite restricciones a medios al ordenar desbloqueo parcial de sitios web

TRIBUNA POPULAR.- El Gobierno encargado ordenó el restablecimiento del acceso a varios portales informativos que permanecían restringidos en el país, en una medida que constituye un reconocimiento oficial de la existencia de bloqueos contra medios de comunicación digitales. Sin embargo, el levantamiento ha sido parcial: organizaciones de derechos digitales reportan que decenas de medios y otros dominios continúan bloqueados.

La decisión fue anunciada el 16 de septiembre por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que recomendó a la administración de Delcy Rodríguez eliminar las restricciones contra dominios de medios de comunicación.

En el comunicado oficial, el programa recomendó adoptar medidas destinadas a favorecer «un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo».

Entre las recomendaciones incluyó explícitamente «eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación» y «promover la libre expresión en un clima de encuentro entre venezolanos».

La recomendación fue seguida por una comunicación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que informó sobre el «restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales».

«A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales infor-



mativos», indicó el organismo.

AL MENOS 20 MEDIOS RECUPERARON EL ACCESO

El número de sitios desbloqueados ha variado según la metodología, la fecha de medición y el proveedor de Internet.

En las primeras horas posteriores al anuncio, VE Sin Filtro verificó el levantamiento de restricciones en 14 sitios de noticias.

El monitoreo posterior de Espacio Público, actualizado el 21 de septiembre, amplió la cifra a 20 sitios de noticias con acceso completo dentro de una muestra de 82 portales que la organización había sometido a verificación.

DECENAS DE MEDIOS SIGUEN BLOQUEADOS

El desbloqueo parcial no significa el levanta-

miento general de las restricciones. En una medición más amplia, Espacio Público y VE Sin Filtro reportaron alrededor de 188 dominios todavía censurados, incluidos entre 55 y 56 medios de comunicación. La cifra contempla no solamente portales periodísticos, sino también organizaciones no gubernamentales, plataformas digitales, herramientas de privacidad y otros sitios.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTTP) calificó inicialmente como positiva la habilitación de varios portales, pero reclamó garantías de que el desbloqueo sea total y permanente. Su secretario general, Marco Ruiz, señaló que el anuncio representa la primera ocasión en que el Gobierno admite públicamente la existencia de medios de comunicación bloqueados en Internet. ■

SALUD
OCUPACIONALEl impacto de la reforma
petrolera en la accidentalidad
laboral

Douglas Gómez

Secretario de Salud y Trabajo de la CUTV

A unísono, gobiernos y empresarios pronostican un período de crecimiento y prosperidad económica a raíz de la multimillonaria inversión extranjera que llegará al país luego de la aprobación y entrada en vigencia, a solicitud del Gobierno norteamericano, de la reforma parcial de la *Ley Orgánica de Hidrocarburos*, cuyos primeros 100.000 millones de dólares de inversión «ya están por llegar» por la vía del acuerdo petrolero recién firmado entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de facto presidido por Delcy Rodríguez.

Pero lo que no dicen ambos gobiernos y las transnacionales petroleras es que ese «futuro próspero» será a costa de grandes sacrificios para la nación y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo (en especial, para el trabajador petrolero), pues no solo se estará hipotecando la soberanía nacional y expropiando nuestra riqueza petrolera por unos míseros impuestos y regalías, sino que las relaciones obrero-patronales que van a empeorar en la industria petrolera se registrarán «con rango y fuerza de ley» por esquemas de flexibilización laboral que, a todas luces, tienden a precarizar aún más las condiciones de trabajo, entre ellas, la salud y la seguridad en el trabajo.

He ahí el impacto negativo de esta reforma en la accidentalidad laboral de la industria petrolera y demás sectores conexos.

Si durante el gobierno de Nicolás Maduro la política de flexibilización laboral que se venía aplicando elevó los niveles de accidentalidad laboral en la industria petrolera, con la entrada en vigencia de esta reforma petrolera, dichos niveles se elevarán aún más. Para muestra, un botón: entre los meses de mayo y junio de 2026 murieron, según reportes de los medios de comunicación, varios trabajadores petroleros y una treintena resultaron heridos en tres accidentes de trabajo ocurridos en distintos lugares de la industria petrolera.

El primero (15 de mayo) fue el naufragio en el lago de Maracaibo de la embarcación «Chantise G», propiedad de la contratista Sioca, con un saldo de 25 trabajadores tripulantes fallecidos y desaparecidos bajo las aguas del lago.

El segundo, ocurrido ese mismo 15 de mayo, fue la explosión y posterior incendio en la planta de compresión de gas Lamarca, del Bloque 5 del lago de Maracaibo, con un saldo de seis trabajadores heridos con quemaduras graves, uno de los cuales falleció posteriormente.

El tercero ocurrió el 28 de junio, tras la explosión del taladro Colven-2, ubicado en el municipio Páez de Apure, donde fallecieron cuatro trabajadores y 11 resultaron con heridas de gravedad.

Estos casos están vinculados a empresas mixtas bajo la modalidad de contrato de participación productiva, donde las condiciones de trabajo son precarias y la acción fiscalizadora del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) está ausente.

Viceministro William Castillo usa
como referencia la mano de obra
«a precio de esclavo» para defender
nuevo modelo petrolero

TRIBUNA POPULAR.- El viceministro de Políticas Antibloqueo de la Cancillería venezolana, William Castillo, utilizó como referencia para explicar el modelo de atracción de inversiones incorporado a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos las reformas económicas emprendidas por China a partir de 1978, entre cuyos incentivos mencionó una «mano de obra prácticamente a precio de esclavo».

Durante una entrevista concedida a una emisora argentina, Castillo explicó que el modelo de participación productiva establecido originalmente en 2017 en la denominada ley Antibloqueo fue diseñado para atraer capitales hacia una economía afectada por las sanciones internacionales y que posteriormente ese esquema fue incorporado a la legislación que regula el sector de hidrocarburos.

«Imagínense China en 1978, cuando empezaron las reformas económicas. No estaban sancionados, pero no estaban en la pelazón, como decimos nosotros, y se dieron un conjunto de beneficios: terrenos, excepción impositiva a 50 años, mano de obra prácticamente a precio de esclavo, para atraer inversiones a una China que no tenía inversiones», afirmó.

Castillo, formó parte del equipo que redactó la ley Antibloqueo, señaló que Venezuela recurrió a un mecanismo similar después de lo que describió como una «devastación económica» provocada por las sanciones.

Según el funcionario, el esquema se implementó en los últimos años en Venezuela, tanto empresas nacionales como extranjeras: «Ese modelo se empezó a aplicar y fue exitoso. Y fue exitoso no sólo con empresas nacionales, algunas empresas extranjeras e incluso empresas estadounidenses y empezó una recuperación petrolera», afirmó.

A partir de esa experiencia, agregó, el mecanismo fue incorporado a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.

«Hay detalles que no se conocen»

Las declaraciones del viceministro se producen pocos días después de la firma de un histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos que da a Washington el control sobre una quinta parte de las reservas probadas de crudo del país suramericano.

Consultado sobre las condiciones específicas del contrato, Castillo reconoció que no conoce sus detalles.

«Hay detalles que no se conocen, yo tampoco los conozco, entonces no puedo dar respuesta a eso», afirmó.

Pese a admitir ese desconocimiento, el funcionario rechazó que el acuerdo implique una entrega de los recursos naturales o de la soberanía venezolana.

«No es que estamos entregando el país, no estamos privatizando el país. No está en duda quién es el dueño, porque se trata de concesiones, de modelo de concesión», sostuvo.

Castillo insistió en que el esquema debe entenderse dentro de las condiciones económicas derivadas de las sanciones y defendió la continuidad de los vínculos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos.

El funcionario recordó que durante el gobierno de Hugo Chávez Venezuela llegó a vender hasta unos 900.000 barriles diarios a Estados Unidos.

«Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro socio histórico en materia petrolera, fue el producto de las sanciones y el bloqueo», afirmó al referirse a la reducción de las ventas venezolanas.

Castillo justificó el acercamiento con Washington por la situación económica y política que atraviesa Venezuela, y describió las negociaciones como una respuesta a las presiones que enfrenta el país.

«En una situación histórica compleja, con una pistola en la cabeza sobre la vida de nuestro pueblo. Nosotros estamos tratando de llevar esto a un plano de negociación», afirmó. ■

¡No al fraude contra el salario y las prestaciones sociales!



Pedro Eusse
Secretario General de la CUTV

La cúpula del gobierno tutelado que preside Delcy Rodríguez, obediente a los dictados del imperialismo estadounidense y a las pretensiones de la burguesía parasitaria venezolana, está acelerando el proceso de normalización y «legalización» de la desregulación y flexibilización laboral que han venido ejecutando desde el gobierno del presidente antiobrero Nicolás Maduro, mediante la bonificación de las remuneraciones de los trabajadores venezolanos y el desmontaje de las convenciones colectivas.

La vieja aspiración de Fedecámaras de desaparecer para siempre el régimen de prestaciones sociales, basado en el cálculo retroactivo por el último salario, de acuerdo con todo el tiempo laborado, la han venido logrando con creces y ventajas adicionales, gracias a la política de destrucción del salario inaugurada por Maduro y continuada por la señora Delcy y su camarilla trumpista.

En esta ocasión, siguiendo el ejemplo y superando lo que fue la tripartita de 1997 (popularizada como «la trimaldita») durante el gobierno neoliberal de Caldera-Petkoff, han montado la patética Mesa de Diálogo de los Consensos Laborales y Sociales, integrada por la infaltable cúpula de Fedecámaras y Fedeindustria, los altos burócratas del gobierno interino y representantes de las centrales CBST, CTV y ASI. Un tripartismo peligroso que efectúa secretos conciliábulos, se constituye siguiendo la agenda de los patronos, es convocado de forma unilateral por el gobierno y excluye a las centrales sindicales no obedientes.

Ya los trabajadores venezolanos sabemos lo que puede salir de esos «consensos laborales».

El 30 de abril de este año, cuando muchos esperaban, al fin, la decisión de un aumento del salario mínimo después de cuatro años, los integrantes de la Mesa de los Consensos Laborales y Sociales, a puertas cerradas, suscribieron un acta en la que aceptaron un «ingreso mí-

nimo integral» equivalente a 240 dólares (sin ninguna incidencia salarial) para el sector público y extensivo al sector privado. Es decir, la continuidad y ampliación de la bonificación salarial, mediante la figura ilegal y fraudulenta del «ingreso integral», para que el salario mínimo siguiera en 130 bolívares mensuales (0,15 centavos de dólar) y, por tanto, no existiera base de cálculo para pagar prestaciones sociales, vacaciones, bonos de fin de año-aguinaldos, etcétera. Un acuerdo tripartito en el que hay un solo ganador: la patronal.

Sabiendo que el fraude contra el salario es contrario a la Constitución (en sus artículos 89, 91 y 92) y a la *Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras* (Lottt), en sus artículos 104, 111, 122, 129 y otros, las élites burguesas agrupadas en Fedecámaras y bien representadas en el actual gobierno del PSUV, aplicando el inmoral chantaje de que no aumentarán el salario hasta que no sea reformada la Lottt han decidido cooptar a varios burócratas sindicales dispuestos a validar la concreción del mayor fraude en la historia laboral de Venezuela.

Las centrales sindicales CUTV, Unete, CGT y Codesa han denunciado que la mencionada Mesa de los Consensos se reunió el 9 de septiembre para comenzar sus trabajos alrededor de una pretendida propuesta de ley de emergencia económico-laboral que serviría para dejar «transitoriamente» en suspenso la aplicación de los derechos al salario y las prestaciones sociales establecidos en la Lottt. Pero también trasciende que pudieran concretar, de una vez por todas, la decisión de reformar la Lottt para cercenar los derechos mencionados y debilitar otros, como los fueros y la inamovilidad laboral. Las centrales sindicales mencionadas han cuestionado que la llamada «Mesa de los Consensos Laborales y Sociales» constituye un falso diálogo social tripartito que valida las violaciones del Estado venezolano a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 95 (protección del salario), 26 (métodos

para la fijación del salario mínimo) y 144 (consulta tripartita).

La posible transitoriedad en la desaplicación y flexibilización de los derechos mencionados estaría relacionada con la expectativa de las fuerzas del capital (foráneas y nacionales) y sus expresiones políticas de producir una pronta modificación de la Constitución que pondría fin a los avances progresistas en cuanto a derechos socio-laborales, económicos y políticos conquistados por el pueblo venezolano en 1999.

La ofensiva del capital, repotenciada desde el establecimiento en Venezuela de un protectorado neocolonial yanqui, avanza aceleradamente para imponer condiciones de sobreexplotación y trabajo sin derechos en nuestro país, todo un paraíso para los monopolios transnacionales y, en general, para la burguesía sin escrúpulos, que tendrán a su plena disposición nuestros recursos naturales con una mano de obra semiesclava.

Ante el inminente peligro del total desmantelamiento del sistema de derechos laborales en Venezuela, que fue tomando cuerpo en la realidad laboral venezolana desde 2018, los trabajadores activos, jubilados y pensionados, con nuestras organizaciones sindicales y gremiales autónomas, no tenemos otra opción que unificarnos y luchar. Eso incluye a las bases de aquellas centrales sindicales cuyas direcciones están actuando como cómplices del gobierno y Fedecámaras en la desacreditada Mesa de los Consensos contra el Salario y las Prestaciones.

Es por ello que, en articulación con las organizaciones agrupadas en el Acuerdo Unitario de Trabajadores, las centrales sindicales CUTV, Unete, CGT y Codesa trabajan en la formulación de un plan de lucha unificado. La iniciativa de calle más inmediata es la Jornada Nacional de Movilización del 24 de septiembre, que levanta las siguientes consignas centrales:

¡Por aumento general de salarios y pensiones, no al despojo de los derechos laborales!
¡No al fraude contra el salario y las prestaciones sociales!

Nueva agresión del ICE contra migrante venezolano en Texas

TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) condenó las agresiones contra migrantes venezolanos en Estados Unidos y exigió al Gobierno venezolano colocar la defensa de sus ciudadanos en el exterior como un asunto central de su agenda, tras conocerse el caso de Wilber Garcés, quien permanece detenido luego de recibir un disparo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Oswaldo Ramos, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, denunció las acciones represivas de organismos de seguridad estadounidenses contra la población migrante y cuestionó la estigmatización de los venezolanos en ese país.

El dirigente comunista mencionó el caso de Garcés, un venezolano de 28 años que fue herido de bala en la espalda durante un operativo de ICE en Austin, Texas, y permanece detenido en el centro de Pearsall.

Ramos también recordó el asesinato de Julio Sosa, ocurrido en enero, como otro caso que evidencia la situación que enfrentan los venezolanos migrantes en Estados Unidos.

El dirigente del PCV cuestionó, además, el programa gubernamental «Vuelta a la Patria», al considerar que estos procesos han terminado, en la práctica, vinculados a deportaciones arbitrarias desde Estados Unidos.

Ramos ostuvo que la defensa de los migrantes debe ocupar un lugar central en la agenda de la administración de Delcy Rodríguez.

«Estos temas deben ser temas de discusión y temas que se resuelvan a favor de los intereses



del pueblo venezolano», afirmó.

El caso de Garcés ha generado además acciones en Estados Unidos. Más de un centenar de congresistas exigieron a ICE su liberación para que pueda recibir atención médica adecuada y solicitaron que se impida su deportación a Venezuela.

La abogada de Garcés presentó una demanda ante una corte federal para solicitar su liberación inmediata y la suspensión de su deportación. Una audiencia sobre el caso fue fijada para el 30 de septiembre.

Garcés ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One y posterior-

mente solicitó asilo. De acuerdo con su representación legal, enfrenta una orden de deportación dictada en ausencia después de que no recibiera una notificación judicial porque esta habría sido enviada a una dirección anterior, pese a que había informado al Gobierno estadounidense sobre su cambio de domicilio.

El PCV insistió en que el Estado venezolano debe condenar y actuar frente a las agresiones contra sus ciudadanos en el extranjero y cuestionó que las relaciones con Washington se desarrollen sin colocar en el centro la protección de los derechos de los migrantes. ■

ONU: Estructuras responsables de graves violaciones de DD.HH. En Venezuela permanecen intactas

TRIBUNA POPULAR.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela advirtió que, pese a una reducción de algunas de las formas más severas de represión después del 3 de enero de 2026, «las estructuras estatales responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad permanecen esencialmente intactas».

En su más reciente informe y un documento de investigación complementario, la Misión examinó la situación del país durante el último año y concluyó que los cambios registrados después del secuestro de Nicolás Maduro no han estado acompañados por las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora sostenida de los derechos humanos.

El organismo observó una disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas. También registró la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y un margen algo mayor para las protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.

Sin embargo, señaló que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas. Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves vio-

laciones continúan ocupando cargos relevantes o fueron reasignados a posiciones clave, entre ellos el actual ministro de Defensa, Gustavo González López y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», afirmó Sofia Macher, presidenta de la Misión.

PERSISTEN TORTURAS Y MALOS TRATOS

La investigación documentó nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas. La Misión investigó 64 casos de tortura ocurridos después del 3 de enero, lo que, según sus conclusiones, demuestra que estas prácticas continúan.

Entre los centros examinados figura el penal de máxima seguridad El Rodeo I, donde documentó prácticas como la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una estructura subterránea conocida como la «máquina del tiempo».

En Fuerte Guaicaipuro, instalación militar, investigó el confinamiento de personas en espacios similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, además de exposición al frío, privación de alimentos y otros tratos degradantes.

La Misión también alertó sobre las condiciones de cientos de personas que continúan privadas de libertad, con acceso severamente restrin-

gido a agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica. El organismo relacionó varios fallecimientos bajo custodia con la falta de atención médica adecuada y los malos tratos.

Entre los casos investigados está el de Víctor Quero Navas, quien murió bajo custodia después de permanecer desaparecido. Su madre, Carmen Teresa Navas, conoció el destino de su hijo más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Murió diez días después de recibir esa información.

Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, 94 % de ellas antes de finalizar 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos, según sus conclusiones, a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.

Aunque las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas continuaban detenidas. La falta de información oficial impide establecer con precisión quiénes han sido liberados y cuál es la situación jurídica de quienes permanecen privados de libertad.

Ante este panorama, la Misión pidió a las autoridades avanzar hacia un proceso de rendición de cuentas y establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas. ■

Partidos Comunistas rechazan gira de Marco Rubio en Colombia, Ecuador y Perú

El «Escudo de las Américas» extiende la arquitectura militar de EE.UU. en la región

TRIBUNA POPULAR.- La gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, entre el 8 y el 10 de septiembre, dejó una agenda centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, cooperación militar, comercio y acceso a recursos estratégicos, en el marco de la política de Washington para reforzar sus alianzas en América Latina.

La visita incluyó acuerdos de cooperación en defensa, inteligencia, minería, energía y tecnología, además de la incorporación de Perú al denominado «Escudo de las Américas», iniciativa promovida por Estados Unidos para articular a gobiernos de la región en materia de seguridad y combate contra organizaciones criminales.

Los resultados de la gira fueron recibidos con rechazo por los partidos comunistas de los tres países. Aunque cada organización concentra su crítica en aspectos diferentes, sus comunicados coinciden en advertir sobre una ampliación de la influencia estadounidense y cuestionar la subordinación de las políticas nacionales de seguridad y defensa a los intereses estratégicos de Washington.

COLOMBIA: COOPERACIÓN MILITAR Y MINERALES ESTRATÉGICOS

La primera escala de Rubio fue Colombia, donde se reunió en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella. La agenda bilateral tuvo como uno de sus principales componentes el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y defensa.

El Gobierno colombiano presentó el denominado Plan Patriota Siglo XXI, orientado a la modernización de las Fuerzas Militares mediante la incorporación y actualización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y capacidades de fuerzas especiales.

De La Espriella planteó además que Colombia vuelva a ocupar un papel central como socio de seguridad de Estados Unidos en Sudamérica.

La agenda no se limitó al ámbito militar. Washington y Bogotá suscribieron acuerdos relacionados con la cooperación en minerales críticos y tierras raras, así como un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear.

El Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de Colombia rechazó la visita y cuestionó el rumbo de la relación con Washington. En su comunicado, calificó la presencia de Rubio como «una afrenta a la dignidad del país» y vinculó su visita con «las expresiones de soberbia, intervencionismo, imposición de aranceles, regreso a la fracasada guerra antidrogas y abusos».

La organización también cuestionó el componente militar de la nueva relación bilateral y la incorporación al «Escudo de las Américas», al señalar que el Gobierno estadounidense pretende validar «el sometimiento, el armamentismo y la incorporación a la alianza militar «Escudo de las Américas», destinada al respaldo incondicional de la política del garrote contra los pueblos hermanos de nuestra América».



El Partido Comunista concluyó su pronunciamiento reivindicando la autodeterminación colombiana y afirmó que «el pueblo colombiano no olvida y no acepta el vasallaje que la nueva oligarquía del poder le quiere imponer».

ECUADOR: SEGURIDAD Y COOPERACIÓN MILITAR

La segunda escala de Rubio fue Quito, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa. La seguridad fue el eje principal del encuentro, en un momento en que Ecuador ha profundizado su cooperación con Washington para enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Los dos gobiernos reafirmaron su coordinación en materia de seguridad, defensa e inteligencia, además de cooperación económica y comercial. La agenda contempla operaciones contra el narcotráfico en alta mar, desmantelamiento de pistas clandestinas, combate a la minería ilegal y seguimiento de las estructuras financieras de organizaciones criminales.

Estados Unidos también anunció recursos adicionales para la cooperación de seguridad ecuatoriana y entregas de equipamiento marítimo. Washington designó además a Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera.

El Partido Comunista del Ecuador rechazó la visita de Rubio y sostuvo que, detrás del discurso de cooperación contra el crimen organizado, existe un proceso de profundización de la presencia militar estadounidense.

«Bajo la fachada de una supuesta 'lucha contra el crimen organizado transnacional', lo que en realidad se consolida es la reactivación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el país», afirmó el Comité Central del PCE.

El partido cuestionó específicamente «el incremento de operativos militares conjuntos, el despliegue de tecnología y tropas foráneas, y la reforma de convenios de extradición», al considerar que estas medidas no resuelven las causas socioeconómicas de la violencia.

En uno de los pasajes centrales de su pronunciamiento, el PCE sostuvo que «esta militarización subordinada al Comando Sur

convierte a nuestro territorio en un enclave geoestratégico del Pentágono».

La organización también advirtió sobre las consecuencias internas que, a su juicio, puede tener esta política. Según el PCE, el alineamiento con Washington profundiza «un modelo de autoritarismo tutelado que utiliza la retórica de la estabilidad para restringir libertades fundamentales, violar derechos humanos y consolidar el desmantelamiento del Estado social».

PERÚ: EL «ESCUDO DE LAS AMÉRICAS» Y LA DISPUTA POR LOS RECURSOS

La última escala de la gira fue Lima. Allí Rubio se reunió con la presidenta Keiko Fujimori y confirmó la incorporación de Perú al «Escudo de las Américas».

El mecanismo busca fortalecer la cooperación entre los países participantes en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

La agenda bilateral también abordó el comercio, la inversión, la inteligencia artificial, la cooperación en seguridad y la explotación de minerales críticos.

La dimensión geopolítica fue más explícita en el caso peruano. Durante su visita, Rubio cuestionó la presencia de capital chino en sectores considerados estratégicos y planteó preocupaciones de Washington respecto a proyectos de infraestructura y tecnología vinculados con China, entre ellos el puerto de Chancay.

La cooperación estadounidense con Perú contempla además el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, un sector considerado estratégico por Washington ante la competencia internacional por materias primas utilizadas en industrias tecnológicas y energéticas.

El Partido Comunista del Perú – Patria Roja rechazó la incorporación del país al «Escudo de las Américas». En su pronunciamiento sostuvo que «la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado deben responder a una estrategia soberana del Estado peruano y a mecanismos de cooperación entre iguales, no a una arquitectura hemisférica diseñada según los intereses estratégicos de Estados Unidos».

La organización también cuestionó la orientación de la política económica vinculada a los recursos estratégicos. «El cobre, el litio y los demás recursos estratégicos pertenecen a la nación», señaló, y afirmó que estos deben servir «al desarrollo soberano, la industrialización, la ciencia, la tecnología y el bienestar del pueblo peruano».

El partido rechazó asimismo que Perú sea incorporado a una política de confrontación entre grandes potencias. «Rechazamos cualquier intento de convertir al Perú en instrumento de una política de bloques o de confrontación contra China, Irán u otros países», sostuvo.

Su planteamiento quedó sintetizado en una de las frases finales del comunicado: «El Perú necesita relaciones con el mundo, pero no tutelaje; inversión, pero no entreguismo; seguridad, pero no subordinación».

¿Una «OTAN islámica»? Las claves del nuevo pacto de seguridad entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán

PAUL DOBSON. - El 7 de agosto se firmó un nuevo y alarmante tratado de seguridad en Oriente Medio y Asia Occidental entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, que algunos comentaristas califican de «OTAN islámica».

Tribuna Popular entrevistó a Gözde Kök, miembro del Consejo de Partido del Partido Comunista de Turquía (TKP), para averiguar más sobre el tratado y sus consecuencias para la lucha de clases en ese país.

TP: El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca es entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, con la posibilidad de ampliarlo para incluir a Egipto, Bangladés y quizás incluso a Irán u otros países. Explícanos cómo este acuerdo modifica el panorama de seguridad de la región y el equilibrio de poder, especialmente para el Estado sionista de Israel.

GK: El Acuerdo de La Meca está empujando a la región hacia una mayor polarización militar, un aumento del armamento y más conflictos. Al considerar un ataque contra uno de ellos como un ataque contra todos, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán están vinculando sus políticas regionales mediante compromisos militares. Esto aumenta el riesgo de que los conflictos, desde Oriente Medio hasta el mar Rojo, puedan arrastrar a otros países.

En cuanto al equilibrio de poder, el acuerdo debe analizarse especialmente en el contexto del debilitamiento de la influencia regional de Irán. El emergente «eje suní» busca tanto llenar el vacío dejado por Irán como asegurar posiciones más sólidas para Turquía, Arabia Saudí y Pakistán en la reestructuración de la región. Sin embargo, se enfrenta a otros centros de poder, entre ellos el eje Israel-Emiratos Árabes Unidos-India y la I2U2 (India, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos). Por lo tanto, no estamos ante un único bloque dominante, sino ante una rivalidad regional cada vez más militarizada y compleja.

El acuerdo tampoco crea el contrapeso antiisraelí que podría parecer. Existen tensiones y rivalidades reales entre Turquía e Israel, pero debilitar a Irán y contener su influencia dentro de sus fronteras es, en sí mismo, un objetivo clave de Israel. Así pues, aunque el Gobierno turco pueda presentar el acuerdo como una demostración de fuerza frente a Israel, el equilibrio emergente, lejos de debilitar a Israel, refuerza su posición en varios aspectos.

TP: La prensa lo ha calificado como una «OTAN islámica». ¿Qué importancia tiene el aspecto religioso a la hora de sellar el acuerdo entre las partes?

GK: Consideramos que la etiqueta «OTAN islámica» es engañosa. El hecho de que los tres países tengan mayorías musulmanas suníes y gobiernos ideológica y políticamente prosuníes, y de que el acuerdo se firmara en La Meca, es sin duda significativo. El emergente «eje suní», especialmente a medida que se debilita la influencia regional de Irán, forma parte de las alineaciones sectarias muy reales que desde hace tiempo han tenido consecuencias sangrientas en Oriente Medio. Dividir la región según líneas sectarias favorece las rivalidades de poder regionales y facilita la intervención imperialista.

Sin embargo, el acuerdo no está impulsado principalmente por la religión ni por un objetivo común de «defender el mundo islámico», sino por las luchas de poder regionales y la búsqueda de mayor influencia por parte de cada una de las partes. Las identidades religiosas y sectarias se



El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro pakistaní, Muhammad Shehbaz Sharif, firman el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca

entrelazan con estas luchas y contribuyen a legitimarlas.

Además, la OTAN no es una estructura a la que se opongan estos gobiernos: es tanto un modelo militar como un marco más amplio con el que el Acuerdo de La Meca está estratégicamente alineado y al que complementa. Por lo tanto, es más acertado considerar el acuerdo no como una «OTAN islámica» alternativa, sino como parte de la expansión de la influencia de la OTAN en el mundo islámico a través de nuevos mecanismos.

TP: Turquía es miembro de la OTAN, mientras que Pakistán y Arabia Saudí son aliados importantes de Washington. Explica la naturaleza y el alcance de las implicaciones —si las hay— que este acuerdo pueda tener para los miembros y sus relaciones con EE. UU. ¿Supone una competencia para la OTAN en la región o es un aliado?

GK: El Acuerdo de La Meca no puede separarse de las políticas de EE. UU. y de la OTAN en la región. Es significativo que se firmara poco después de la Cumbre de la OTAN en Ankara, donde se otorgó mayor protagonismo regional a la capacidad militar y a la industria armamentística de Turquía y se tomaron medidas para ampliar el papel de la OTAN en Oriente Medio. El establecimiento del Cuartel General del Cuerpo Multinacional de la OTAN (MNC-TUR) en Adana forma parte de esa misma línea. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, describió explícitamente la alianza de La Meca como «complementaria» a la OTAN.

Mientras tanto, Estados Unidos lleva mucho tiempo presionando a sus aliados regionales para que asuman una mayor responsabilidad política y militar en la contención de Irán. El refuerzo de la seguridad de Israel, la limitación de la influencia iraní y el control de las rutas energéticas y comerciales de la región son elementos interrelacionados de esta estrategia.

Los recientes acontecimientos muestran la rapidez con la que el acuerdo puede adquirir una función militar concreta. A medida que se intensificaban los combates en Yemen, Pakistán declaró que el acuerdo se activaría en caso de un ataque contra Arabia Saudí. El apoyo a Riad frente a Ansarullah, parte del «Eje de la Resistencia» vinculado a Irán, se ha convertido así en una posible aplicación —plenamente coherente con los objetivos de EE. UU., la OTAN e Israel—.

Por lo tanto, consideramos que el acuerdo es

un medio para que Turquía, Arabia Saudí y Pakistán se alineen con los planes e intervenciones imperialistas, al tiempo que buscan un mayor peso e influencia en el marco de la reestructuración de la región.

TP: En Turquía existe una fuerte oposición a su pertenencia a la OTAN, como demuestran las protestas generalizadas que tuvieron lugar en julio, encabezadas por el TKP contra la cumbre de la OTAN. ¿Existe una oposición similar a este nuevo acuerdo entre la clase trabajadora turca? ¿Y cómo influye su firma en la lucha de clases en su país?

GK: Existe una corriente antiimperialista y patriótica con profundas raíces históricas, pero hoy en día carece de la energía necesaria para traducirse en una resistencia de masas. Los trabajadores, agotados por la pobreza y la injusticia, han perdido en gran medida la fe —e incluso el interés— en la política burguesa. Sin embargo, en lo que respecta a la política exterior, la retórica del «interés nacional» empleada tanto por el Gobierno como por la oposición burguesa crea a veces una considerable confusión sobre las medidas adoptadas por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) —el partido en el poder—, lo que dificulta ver la conexión entre los problemas internos y los acontecimientos de la política exterior.

Sin embargo, la Cumbre de la OTAN reveló algo importante. Aunque no hubo movilización de masas, la resistencia casi en solitario del TKP —y su desafío a la prohibición de las manifestaciones contra la OTAN en Ankara el 5 de julio— atrajo un considerable interés y apoyo por parte del público. Esto sugiere que muchas personas que aún no están preparadas para actuar por sí mismas están, no obstante, dispuestas a apoyar a quienes se resisten abierta y resueltamente al imperialismo.

Nuestra tarea consiste en convertir este sentimiento en una fuerza organizada. Explicamos cómo los planes e iniciativas regionales de la OTAN, como el Acuerdo de La Meca, están sentando las bases para futuras guerras e inseguridad, pero, sobre todo, cómo la pobreza en nuestro país y el expansionismo militarista en el extranjero son inseparables: ambos están impulsados por la búsqueda de mayores beneficios, mercados e influencia por parte de la clase capitalista. Esto requiere un intenso trabajo político y organizativo, pero estamos empezando a ver resultados. ■

NAZA: el documental israelí premiado en Venecia que el sionismo quiere silenciar

TRIBUNA POPULAR.- El documental israelí NAZA, dirigido por los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, se convirtió en el centro de una intensa controversia política y cultural en Israel después de recibir el Premio Especial del Jurado de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La película, de 80 minutos y producida por el diario británico The Guardian, aborda las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza a partir de los testimonios de 24 oficiales y miembros de los servicios de inteligencia militar israelíes, cuyas identidades fueron protegidas. El documental examina, entre otros aspectos, los sistemas tecnológicos empleados para identificar objetivos y las reglas utilizadas para calcular las posibles víctimas civiles de los bombardeos.

El jurado del Festival de Venecia concedió el premio a NAZA el 12 de septiembre, después de que su estreno recibiera una ovación de aproximadamente 25 minutos.

El reconocimiento internacional desencadenó, sin embargo, la furia del sionismo. El Gobierno de Benjamin Netanyahu, mandos militares y sectores de la derecha israelí han acusado a los realizadores de difamar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), de perjudicar al Estado y, en algunos casos, de cometer «traición».

UN DOCUMENTAL CONSTRUIDO A PARTIR DE TESTIMONIOS DE MIEMBROS DEL APARATO MILITAR

NAZA toma su nombre de un acrónimo utilizado dentro de los servicios de inteligencia israelíes para referirse al número estimado de civiles que podrían morir como consecuencia de un ataque. De acuerdo con el documental, expresiones como «20 NAZA» serían utilizadas para identificar una estimación de veinte víctimas civiles asociadas a una operación determinada.

La película se apoya en testimonios de 24 miembros de los servicios de inteligencia y del aparato militar israelí, quienes describen procedimientos empleados durante la guerra en Gaza. Las fuentes permanecen en el anonimato y sus voces e identidades fueron protegidas.

Entre los principales asuntos abordados se encuentra el empleo de sistemas tecnológicos y modelos de inteligencia artificial para localizar objetivos y estimar posibles víctimas. La película sostiene que determinadas herramientas permitieron acelerar la selección de blancos y que los civiles podían ser incorporados de manera anticipada al cálculo de las consecuencias de una operación.

Uno de los testimonios recogidos en el documental describe sistemas capaces de analizar información para determinar la concentración de personas dentro de determinados edificios. La película también aborda modelos destinados a identificar posibles integrantes de Hamás mediante patrones derivados de información telefónica y otros datos.

En el discurso pronunciado al recibir el premio en Venecia, Yuval Abraham afirmó que el propósito de la película era mostrar que las muertes de civiles que documenta no fueron presentadas por sus fuentes como hechos accidentales, sino como consecuencia de procedimientos establecidos.

Abraham reclamó, además, que el documen-



Los directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, de la película "Naza", con el galardón del Premio Especial del Jurado en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia.

tal sea visto en Israel. «Es realmente importante que los israelíes vean esta película», afirmó, argumentando que se refiere a actuaciones realizadas por su propio Estado. También pidió que fuera vista en Estados Unidos, país al que responsabilizó de financiar una parte sustancial de las operaciones militares israelíes.

LAS FDI RECHAZAN LAS ACUSACIONES

El Ejército israelí respondió públicamente al documental. Las FDI negaron que la inteligencia artificial determine por sí misma los objetivos de los bombardeos y afirmaron que las decisiones operativas son adoptadas dentro de una cadena de mando humana. También cuestionaron la posibilidad de verificar la identidad y las funciones de las fuentes anónimas utilizadas por la película.

El jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, ordenó crear un equipo para estudiar las acusaciones planteadas por la película, evaluar posibles acciones legales y determinar si durante su elaboración fueron utilizados de manera no autorizada materiales clasificados.

El Ministerio de Exteriores israelí también rechazó el contenido de NAZA y lo calificó de «propaganda», alegando que sus acusaciones se sustentan en testimonios anónimos que, a juicio del Gobierno, carecen de pruebas verificables.

La controversia alcanzó al propio primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó el documental de «intolerable» y afirmó que Israel combate la incitación antisemita a escala internacional, pero que, a su juicio, resulta igualmente inaceptable cuando esas acusaciones proceden de ciudadanos israelíes.

Días después anunció que impulsaría dos proyectos legislativos relacionados con las críticas a las Fuerzas de Defensa de Israel. El primero contempla la posibilidad de revocar la ciudadanía israelí a personas que «difamen» a los soldados de las FDI o al Estado de Israel en el exterior. El segundo buscaría aumentar de manera considerable las indemnizaciones previstas en demandas por difamación contra quienes realicen ese tipo de acusaciones. Según los reportes publicados sobre la propuesta, el monto máximo podría alcanzar un millón de dólares.

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS FUENTES

El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitó al jefe del Shin Bet, David Zini, investigar quién proporcionó los materiales utilizados en el documental, cómo fueron obtenidos y si se produjo una divulgación ilegal de información de seguridad.

El ministro pidió asimismo determinar si quienes suministraron la información tenían vínculos con organizaciones consideradas hostiles por Israel, incluida Hamás. Zohar argumentó que conocer esos elementos permitiría evaluar un eventual procedimiento para retirar la ciudadanía de los cineastas.

Las amenazas no se limitaron a las declaraciones de funcionarios. Durante varios días, grupos de manifestantes se concentraron frente a la residencia de los padres de Rachel Szor, mientras en distintas partes del país aparecieron pintadas que calificaban de «traidores» a los realizadores.

UNA RESPUESTA TAMBIÉN DENTRO DE ISRAEL

La reacción contra NAZA no ha sido unánime dentro de Israel. 43 organizaciones israelíes de derechos humanos emitieron una declaración conjunta en respaldo de Abraham y Szor.

Las organizaciones reclamaron el cese de las amenazas contra los cineastas y sus fuentes y rechazaron las iniciativas destinadas a retirarles la ciudadanía. También pidieron que la película pueda ser proyectada en Israel para que la población pueda verla y formar su propia opinión.

A esta posición se sumó una movilización dentro del propio sector cinematográfico. Más de 1.500 cineastas israelíes suscribieron una petición en defensa de Abraham y Szor y de la libertad de expresión y creación.

La controversia alcanzó incluso al Consejo del Cine de Israel, organismo público vinculado a la política cinematográfica del país. El Consejo pidió una proyección urgente de NAZA ante sus miembros y profesionales del sector.

El planteamiento resulta significativo porque el organismo señaló que mantener la película fuera de Israel podía alimentar precisamente las sospechas de que se trataba de una obra manipulada. Su posición fue que los profesionales israelíes deberían poder verla antes de formular un juicio sobre su contenido. ■



QUE SE VAYAN
TODOS

CONSTRUIMOS UNA
ALTERNATIVA POPULAR
Y SOBERANA



PARTIDO
COMUNISTA DE
VENEZUELA-PCV